

Las elecciones para gobernador del Estado de México en 2011: el ensayo de la campaña presidencial del PRI

Gabriel Corona Armenta¹

Introducción

El objetivo del presente trabajo es demostrar por qué los comicios de 2011 son estratégicos para el gobernador Enrique Peña Nieto. A través de ellos busca reforzar su imagen de ganador, requisito indispensable para fortalecer sus aspiraciones presidenciales en 2012. Por esta razón, durante el proceso electoral utilizó todos los recursos a su alcance, para que su partido retuviera la gubernatura del estado, requisito indispensable para conseguir la candidatura presidencial y facilitar el regreso del PRI a Los Pinos.

Desde hace muchos años la entidad mexiquense se ha convertido en una especie de laboratorio electoral nacional. Las razones son varias. La principal es que posee el mayor asentamiento poblacional del país, y por lo tanto, el porcentaje más alto dentro del padrón electoral nacional.

Pero hay otras razones políticas. Desde la década de 1940, en el estado de México se formó uno de los grupos políticos más poderosos del país, que en repetidas ocasiones ha entrado en la disputa por el poder presidencial. Este grupo político ha controlado la política local desde entonces. Pero no sólo eso. Algunos de sus miembros más destacados han ocupado importantes secretarías de Estado. De forma automática, la ocupación de esos cargos ha posibilitado que algunos de ellos se coloquen en la antesala del poder presidencial: los casos más recientes son los de Arturo Montiel Rojas y el de Enrique Peña Nieto. Por eso la elección mexiquense en 2011 fue tan importante para la estrategia priista, con miras a la elección la presidencial de 2012, verdadero objetivo de las elecciones para gobernador del estado.

Sin embargo, contra lo esperado, en 2011 se rompió con la tradición establecida de nombrar un candidato nacido en el valle de Toluca-Atlacomulco y se nombró un aspirante del Valle de México. En otras palabras, el gobernador mexiquense privilegió la unidad priista para

¹ Doctor en Ciencia Política por la UNAM. Profesor de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. UNAM. Edificio de Posgrado, 2° Piso, Cub. 12. Av. Alcanfores esq. San Juan Totoltepec, s/n, Sta. Cruz Acatlán, Naucalpan Edo. de México, C. P. 53150. Correo electrónico: gacoar@unam.mx.

mantener la tendencia ganadora de su partido y que, a través de él, el PRI regresara a la presidencia de la República en 2012.

La integración del órgano electoral

El proceso electoral para gobernador del estado inició el 2 de enero de 2011, con una confrontación entre los consejeros propuestos por el PRI y sus aliados con la oposición. PAN, PRD y PT mostraron desconfianza en la mayoría de los consejeros. El inicio lleno de acusaciones fue un presagio de lo que vendría después: constantes acusaciones de parcialidad a los consejeros electorales.

En este contexto de poca confianza se integraron las juntas distritales. Su composición fue impugnada por el PRD y PT, por su evidente proclividad al PRI y a sus aliados. (REM, 3-II-2011) Durante esta etapa fue complicado el inicio del proceso electoral. Las dificultades para la instalación de las juntas distritales fue una muestra del problema. (EST, 6-II-2011) A pesar de ello, los tribunales sólo modificaron parcialmente la composición de las juntas. Por esta razón, PAN, PRD y PT mantuvieron su desconfianza en el órgano electoral. (MEM, 9-II-2011)

Fueron evidentes las fuertes disputas entre los partidos y los consejeros en cada una de las actividades del proceso. Todo ello generó un ambiente de hostilidad que puso al descubierto la falta de diálogo y negociación al interior del IEEM.

La alianza frustrada.

Uno de los temas más recurrentes durante 2011 fue la posible alianza entre PAN y PRD. Esto se discutía incluso desde el 2010, cuando la eficacia de algunas de ellas hizo pensar en la viabilidad de su realización en el estado. Aunque la opinión de López Obrador fue contraria a ella, para un sector del PAN y el PRD la posibilidad de una alianza generó expectativas y aliento. (EUEM, 6-II-2011)

Febrero de 2011 fue escenario de diversos pronunciamientos en torno a la posible alianza. Dadas las experiencias en otros estados, los líderes partidistas decidieron realizar una consulta, para conocer la opinión ciudadana. (EUEM, 14-II-2011; REM, 16-II-2011). El asunto fue tan importante que el CEN del PAN encargó al diputado Javier Corral lo referente a la consulta. El objetivo final era concretar la alianza en el estado de México. (REM, 19-II-2011)

La expectativa siempre fue que el éxito de la consulta podía cambiar las probabilidades de triunfo electoral de cada partido en 2011 y 2012. Por eso el principal objetivo de la consulta fue dotar de legitimidad a la probable alianza. De esta forma se trataba de modificar la correlación de fuerzas políticas en la entidad, para postular como candidato de unidad a un panista o a un perredista.

El 3 de marzo se anunció la decisión de realizar la consulta ciudadana, para conocer la opinión sobre una posible alianza entre PAN y PRD, en la contienda por la gubernatura. La consulta se fijó para el 27 de marzo. El tema generó mucho debate entre las fuerzas políticas que la promovieron y los grupos opositores que la descalificaron. Algunos la vieron como una contradicción entre los diversos principios ideológicos partidistas.

Gustavo Madero y Jesús Ortega anunciaron que la consulta la harían Alianza Cívica y Propuesta Cívica. Ninguno de los dos partidos participaría en la organización de la misma. También se dijo que habría 1 200 mesas de votación en todo el estado, con 350 boletas cada una, y que los resultados preliminares se conocerían en la misma noche del 27 de marzo.

Una vez formalizada la convocatoria para la consulta, las voces de apoyo y de rechazo se generalizaron. En la izquierda hubo un importante sector contrario a la consulta ciudadana y a una alianza política. Algunos grupos del PRD amenazaron con la escisión. También algunos políticos panistas se inconformaron con la consulta y con la posible alianza. Argumentaron que el PAN contaba con los recursos para competir solo. No consideraron que la consulta era un ejercicio en donde la ciudadanía tendría la oportunidad de incidir en la vida política del estado de México. Lo anterior dio una nueva dirección a la lucha por el poder.

La consulta ciudadana para definir si había o no alianza obtuvo una respuesta positiva. La ciudadanía mexiquense apoyó la alianza entre el PAN y el PRD, para competir por el gobierno del estado de México. Las mesas de votación recogieron los votos de los 125 municipios de la entidad. Según las cifras, se registraron más de 250 mil sufragios, de los cuales cerca del 76 % votó por el sí. No obstante lo contundente del resultado, los opositores al ejercicio lo minimizaron. Señalaron que el número de votantes era poco significativo, comparado con los más de diez millones de ciudadanos incluidos en el padrón electoral de la entidad.

De todas formas el ejercicio ciudadano fue exitoso. Permitió conocer la opinión de la ciudadanía mexiquense sobre la alianza. Este hecho fortaleció la decisión de las dirigencias partidistas de aliarse el 3 de julio. Pero la controversia en torno a la alianza continuó. No obstante el resultado positivo de la consulta, el PAN y el PRD no concretaron la alianza. El blanquiazul mostró mayor interés en unir fuerzas con el sol azteca, pero algunos grupos del PRD se opusieron tenazmente. Desconocieron el resultado del 27 de marzo. En parte el cambio de postura se debió al relevo en la dirigencia nacional perredista, ya que desde la secretaría general se dio un giro a las negociaciones anteriores.

La dirigencia del PAN estaba dispuesta a la alianza, siempre y cuando su candidato la encabezara. (MEM, 28-II-2011) En el caso del PRD ni eso. La nueva dirigencia perredista se opuso. Nunca se mostró dispuesta a cumplir los acuerdos de Jesús Ortega. La nueva secretaria general, Dolores Padierna, asumió un papel determinante. Con ella recobró fuerza la corriente de López Obrador dentro del PRD.

Un sector del PAN y del PRD se empeñó en lograr una alianza electoral que les permitiera derrotar al PRI en la elección de gobernador del estado. (MEM, 4-IV-2011) Aprovechando experiencias previas como la de Oaxaca, Sinaloa, Puebla, en 2010, y Guerrero en 2011, empeñaron todo su capital político para lograr la alianza. A pesar de las resistencias internas, estos partidos organizaron una consulta ciudadana exitosa. Sin embargo, López Obrador, a diferencia de lo que había hecho en Oaxaca, decidió no apoyarla. Argumentó razones ideológicas para hacerlo: que la izquierda y la derecha no se podían juntar, como si ser de izquierda en Oaxaca y en el Estado de México fuera diferente. (REM, 3-III-2011) Unos sí podían hacerlo porque él lo permitía y a otros se les negaba porque esa alianza no entraba en su proyecto político para 2012. López Obrador decidió oponerse con toda su fuerza política. Primero destapó a Yeidkol Polenvski, ex candidata en 2005 para el mismo cargo. Al ver el escaso entusiasmo generado por tal imposición rectificó y propuso a Alejandro Encinas, ex jefe de gobierno interino del DF.

La situación se complicó, porque Encinas había declarado poco antes que no reunía los requisitos para aspirar a la gubernatura del estado. Sostuvo que no cumplía con el requisito de residencia. Había sido electo diputado plurinominal por el DF y residía en Coyoacán. Pero López Obrador pensaba distinto. Encinas era el personaje necesario para su movimiento y el estado de México era parte del escenario. Lo convenció de contender.

También logró que el PRD revirtiera la decisión del congreso estatal del PRD, que por mayoría absoluta, pero no calificada, había aprobado la alianza electoral con el PAN. Al final se impuso la decisión de López Obrador y Encinas fue el candidato. (MEM, 15-IV-2011)

El 10 de abril el consejo del PRD enterró la alianza con el PAN, al no alcanzar la mayoría calificada. (MEM, 10-IV-2011) En consecuencia, se rechazó la decisión que tomó el PRD estatal de formar un frente opositor al PRI. Con 91 votos a favor, de Nueva Izquierda y Alternativa Democrática Nacional, 77 en contra del G-8 y 18 abstenciones de los consejeros vinculados a Marcelo Ebrard, además de Jesús Zambrano, se rechazó la propuesta de coalición con el PAN, con un programa y candidato común en las elecciones del 3 de julio. Además, con la abstención de la corriente que dirige el PRD mexiquense, se aprobó una alianza con el PT y Convergencia. El abanderado fue Alejandro Encinas. Los dirigentes del PAN guardaron silencio sobre la decisión del PRD.

Encinas fue el candidato con el apoyo formal de todas las corrientes perredistas. También lo apoyó el PT y Convergencia. Sin embargo, este último había sido un aliado tradicional del PRI en la legislatura local. Incluso sus diputados, encabezados por Horacio Jiménez, votaron a favor de la llamada “Ley Peña,, que recortó las campañas e impidió las candidaturas comunes. Con ese antecedente el PRD lo hizo su aliado, a pesar de que Convergencia en el estado de México desacataba incluso los acuerdos de su dirigencia nacional. Al final Convergencia apoyó a regañadientes la campaña de Encinas, pero sin entusiasmo ni recursos. Tenía más compromisos con el gobierno del estado que con el PRD local.

El acuerdo perredista fue poco sensible frente a la ciudadanía. La decisión de más de 250 mil mexiquenses fue ignorada y se impuso la decisión de las cúpulas partidistas. (EST, 6-IV-2011) La justificación del PRD para no aliarse con el PAN fue que favorecía la unidad interna del partido. Por su parte, el PAN no le dio una nueva dirección a su estrategia electoral y se quedó sólo. La alianza se concretó, pero no formó parte de ella.

Fueron los intereses partidarios y de grupo los que la impidieron la alianza. Sin embargo, la consulta tuvo un elemento favorable. Después de tantas experiencias negativas, de la falta de credibilidad de los partidos políticos y de la política en general, la ciudadanía participó en una decisión trascendental para la vida política del estado. A pesar de todo, la

experiencia de la consulta ciudadana fue un parte aguas en materia de participación ciudadana. Con ella se trató de modificar la relación entre la clase política y la sociedad mexiquense.

La consulta dotó de legitimidad a dos fuerzas que habían decidido unirse para luchar por el poder político. El mayor mérito de la consulta fue tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía mexiquense en una decisión transcendental. Con esto se dio inicio a una nueva forma de hacer política. Se consideró la participación de la sociedad en la toma de decisiones que los partidos políticos acostumbran. Se trató de generar otro tipo de relación entre la ciudadanía y la clase política. Por ello era deseable que este tipo de consultas se extendieran a otros ámbitos del sistema político.

Aunque se pensaba que la consulta ciudadana sería un elemento que propiciaría cambios en la relación entre la ciudadanía y la clase política, este hecho no ocurrió. El desconocimiento del resultado a favor de la alianza de grupos perredistas mostró que seguía imperando la decisión de las cúpulas partidistas. Se hizo evidente que las decisiones fueron tomadas por una minoría con una concepción patrimonial de sus partidos.

La decisión del PRD nacional de ignorar la votación de más de 250 mil mexiquenses mostró que en nuestro sistema político imperan las decisiones partidistas. Hizo evidente que los grupos políticos no ceden en sus objetivos particulares. La consulta ciudadana sólo se recordará como un simulacro que pretendía cambiar la relación entre la sociedad y la clase política. Sin la alianza entre las dos fuerzas opositoras de mayor peso en el escenario se facilitó para el PRI. Al final, el voto de ciudadano castigó a estos dos partidos, que primero motivaron su participación y después ignoraron el resultado. Los partidos interesados en la consulta, especialmente el PRD, desconocieron el resultado. Subestimaron la opinión de los mexiquenses. Mostraron que la última palabra la tenían las cúpulas partidistas. Desaprovecharon la oportunidad de cambiar la relación entre la sociedad y la clase política del estado de México.

Las alianzas reales.

El 26 de marzo de 2011 los principales diarios de circulación nacional y local anunciaron algo que sorprendió a muchos priistas y a gran parte de la oposición. Alfredo del Mazo Maza renunció a sus aspiraciones de ser candidato del PRI al gobierno del estado. (EUEM, 27-III-2011) Se esperaba que éste fuera el candidato de unidad. Aparecía como el principal

puntero y no Eruviel Ávila. Al final, Del Mazo ofreció su apoyo a Eruviel, que se convirtió en el candidato de unidad. Este hecho generó un escenario distinto a la competencia para la gubernatura.

Esta noticia sorprendió a muchos porque rompió la tradición de que el candidato al gobierno fuese un miembro del grupo Atlacomulco. Esta lógica en la sucesión era factible por la red de nexos y contactos políticos que la familia Del Mazo ha generado en los años que ha gobernado el estado. El destape como candidato de unidad de Eruviel Ávila evidenció un cambio en la correlación de fuerzas de cada región del estado. El ex alcalde de Ecatepec fue apoyado por gran parte de las priistas del Valle de México, y Del Mazo fue apoyado por las élites priistas de la entidad. Las condiciones estaban dadas para una disputa interna. Sin embargo, las experiencias donde el PRI perdió al dividirse fueron aprendidas por el gobernador Peña. Las derrotas ante alianzas opositoras al PRI le sirvieron como ejemplo. Entonces buscó un candidato de unidad, para evitar cualquier tipo de escisión que trajera problemas al interior del partido.

La noticia de que Eruviel Ávila era el candidato de unidad fue una muestra de que existía la posibilidad de una ruptura al interior del PRI mexiquense. Con la decisión de destapar a Eruviel, el PRI buscó hacer frente a cualquier tipo de oposición para mantenerse en el poder político en el estado de mayor peso electoral del país. Sabía que una derrota del PRI cambiaría de manera significativa el escenario creado en torno a las elecciones presidenciales de 2012. Por ello Peña rompió con la tradición establecida de nombrar un candidato del Valle de Toluca, a cambio de apoyos a su proyecto, para que el PRI regresara a la presidencia de la República.

En abril de 2011 fueron creadas dos coaliciones partidistas: “Unidos por ti,, (PRI, PVEM y PANAL) y “Unidos podemos más,, (PRD, PT y Ca). Los tres primeros se registraron como coalición para buscar la gubernatura el 3 de julio. Aseguraron que los unía la visión de Estado, los problemas de la entidad y la figura de Eruviel Ávila Villegas como candidato de unidad. El líder estatal del PRI afirmó que la coalición estaba sustentada en un programa común de ideas.

Por su parte, el PRD descartó cualquier posibilidad de aliarse con el PAN. Prefirió buscar el triunfo electoral con el PT y Convergencia, a pesar de que nunca le habían aportado gran

cantidad de votos. Formó con ellos una coalición llamada “Unidos podemos más,, encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez.

La insistencia en las alianzas partidistas para obtener el triunfo electoral era porque las mismas habían demostrado ser un instrumento útil en nuestro país y esperaban que el estado de México no fuera la excepción. Las experiencias de Oaxaca, Puebla, Guerrero y Sinaloa, entre otras, generaron una serie de expectativas para los partidos grandes y pequeños, que vieron en las coaliciones una manera de sobrevivir dentro del sistema de partidos. En el caso de “Unidos por ti,, la moneda de cambio que ofreció el PRI al PVEM y a NA fueron posiciones políticas, espacios en la toma de decisiones, canonjías, prebendas y emolumentos que no podían obtener ellos solos. En el Estado de México, NA ofertó al mejor postor el voto que representa el SNTE. A diferencia de otros estados, el mejor postor fue el PRI. Por su parte, el PVEM desde hace tiempo se ha mostrado como aliancista. Esta posición le ha permitido mantenerse dentro del sistema de partidos y recibir las prerrogativas que por ley corresponden a los partidos con registro. El PRD buscó unirse con otros partidos que se hacen llamar de izquierda, para convertirse en una fuerza política de mayor peso; para contrarrestar la influencia del PRI en la entidad mexiquense.

En cuanto a la coalición de izquierda, “Unidos podemos más,, se pretendió repetir la experiencia de Guerrero, en donde el PRD venció al PRI en coalición. Sin embargo, las circunstancias entre una entidad y la otra fueron distintas. C y PT se aliaron al PRD para mantener su registro, no para ganar. Solo en caso de obtener el triunfo el 3 de julio podían aspirar a ocupar posiciones dentro de la estructura política de la entidad. Las alianzas partidistas se mostraron como una herramienta útil para garantizar, en algunos casos, la permanencia de los partidos de menor influencia política, pues no podrían sobrevivir en el sistema de partidos sin aliarse con partidos con mayor influencia.

El caso del PAN.

Ante el fracaso de la alianza electoral, en el PAN surgieron varios aspirantes. Entre ellos destacaron Luis Felipe Bravo, Ulises Ramírez y José Luis Durán: Bravo ya había sido candidato en 1993, contra Chuayffet; Durán, presidente municipal de Naucalpan en dos ocasiones, había competido contra Montiel, en 1999; por su parte, el senador Ramírez había sido presidente municipal de Tlalnepantla y coordinador de asesores del fallecido secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de donde provenía su mayor capital político. Al

final Durán y Ramírez declinaron a favor de Bravo Mena, quien fue ungido sin mayores problemas. Se pensaba que contaba con todo el apoyo del presidente Calderón, aunque esto no se hizo evidente durante la campaña.

La polémica en torno a los registros.

En mayo de 2011 se registraron los candidatos del partido y coaliciones que compitieron por la gubernatura. Todos hablaron de sus perspectivas en torno al proceso y de las condiciones de competitividad en la elección.

El día de su registro Eruviel Ávila condicionó su participación en los debates, al considerarlos una pérdida de tiempo; Luis Felipe Bravo habló de la intervención del gobierno estatal en la elección y de su preocupación por la limpieza de los comicios; finalmente, Alejandro Encinas defendió la legalidad de su registro y la utilidad de los debates.

Desde el registro de los candidatos inició la guerra de declaraciones entre ellos. Ávila enfrentó una ola de acusaciones sobre la intervención del gobierno del estado en su campaña y sobre el uso de prácticas corporativas de su partido y sus aliados. (MEM, 6-V-2011) A Luis Felipe Bravo se le acusó de utilizar programas de asistencia social de carácter federal, en particular de Oportunidades. (EST, 8-V-2011) Además, algunos lo acusaron de no cumplir con el requisito de residencia en la entidad. Por su parte, Encinas tuvo serias dificultades para acreditar su residencia en la entidad, acusación que le pesó durante toda la campaña.

Dos de los tres aspirantes a la gubernatura del estado enfrentaron cuestionamientos sobre su residencia. El primero fue Alejandro Encinas, lo cual ya fue reseñado. Aunque inicialmente dijo que no residía en el estado de México, después afirmó que tenía su residencia en Texcoco. Aunque legalmente pudo superar este obstáculo, apoyándose en una serie de jurisprudencias, la duda sobre su residencia persistió. Recurrentemente enfrentó la misma pregunta sobre el tema y se convirtió en una desventaja a la larga. La gente lo identificaba más como el ex jefe de gobierno del DF, que como antiguo candidato del PRD al gobierno del estado de México, en 1993.

Por extraño que parezca, ni el PAN ni el PRI impugnaron legalmente el registro concedido a Encinas por el IEEM, sin que se mostrara el expediente. Las impugnaciones fueron hechas por militantes, pero los tribunales no les reconocieron interés jurídico y desecharon

las quejas. (MEM, 8-V-2011) Jamás se entró al fondo del asunto de la residencia, pero fue un tema recurrente en los medios. El registro quedó firme. Dio la impresión que hubo un acuerdo entre los partidos, o probablemente el PRI no impugnó para convertirlo en mártir y subirlo mediáticamente. Esta decisión se vio reflejada en la pobre argumentación de los consejeros de IEEM y la interpretación laxa sobre la residencia de Encinas.

A Bravo Mena también se le imputó falta de residencia en el estado, desde que había sido nombrado embajador en El Vaticano, en 2007, y secretario particular del presidente de la República, en 2008. Sin embargo, la acusación no prosperó. Es ampliamente conocido que la residencia no se pierde por el desempeño de cargos diplomáticos en el extranjero. Lo que si prosperó fue la acusación de ser miembro de la organización ultra secreta de la derecha católica, El Yunque.

Eruviel Ávila no fue impugnado. Nació en Ecatepec, representó y gobernó a su municipio. Siempre fue un político local. Su escasa experiencia nacional fue lograda durante su breve presidencia en una agrupación nacional de municipios. Este hecho y ser el primer candidato del PRI nacido en el Valle de México después de muchas décadas fue un factor decisivo en su éxito electoral.

El financiamiento de los partidos políticos

El 6 de febrero se anunció el presupuesto que entregó el IEEM a los partidos con registro en el estado, para la elección de gobernador. Dicho presupuesto, estimado en 698 millones de pesos, tuvo como objetivo que los partidos realizaran las acciones necesarias en las campañas políticas; que dispusieran de recursos para promover sus ideas, propuestas y plataformas. Dotarlos de recursos para posicionar a su candidato frente a las otras fuerzas políticas. (MEM, 1-II-2011)

El IEEM estableció un tope de casi 204 millones de pesos en los gastos de campaña. Dicho tope tuvo como objetivo evitar una competencia desigual. El gasto de los partidos políticos elevó los costos de la democracia en la entidad. El elevado financiamiento a los partidos políticos, el costo de las boletas electorales y el de cada voto, hizo de las elecciones actividades muy onerosas, más caras que en países democráticos.

Sin embargo, no existió una correlación entre los recursos y el buen funcionamiento de las instituciones. En diversas ocasiones se pudo observar que, independientemente del dinero destinado al proceso electoral, ocurrieron desviaciones que afectaron la credibilidad de la

democracia. Además, la institución electoral no fue eficiente en el ejercicio de los recursos asignados a los partidos políticos; incluso tuvo atrasos para asignar las prerrogativas.

El desarrollo de las campañas

El lunes 16 de mayo, después de la medianoche, iniciaron las campañas en busca de la gubernatura del estado de México. (MEM, 16-V-2011) A los actos acudieron líderes partidistas y figuras históricas, en particular del PRI y del PRD. En el caso del PRD, destacó la presencia de López Obrador, Marcelo Ebrard y Cuauhtémoc Cárdenas. (MEM, 17-V-2011) El candidato del PRI contó con la presencia de sus dirigentes nacionales. En contraste con sus competidores, Bravo Mena inició tarde en Zinacantepec, con poca gente y sin el apoyo de su dirigente nacional.

La desventaja fue clara para Bravo. En las encuestas siempre fue el candidato con menor intención de voto. En el caso de Alejandro Encinas, aunque mostró mayor apoyo de los miembros de su partido, la intención de voto no creció lo suficiente para estar en condiciones de alcanzar al puntero.

Durante la segunda semana de mayo los candidatos contaron con la presencia de funcionarios federales, ex gobernadores y algunos mandatarios de entidades. Los candidatos recorrieron diversas localidades y espacios académicos, para exponer sus proyectos de gobierno. Las propuestas de algunos candidatos generaron comentarios negativos de diversos actores políticos, en medio de las permanentes acusaciones sobre los gastos de campaña.

Durante mayo la campaña de Bravo Mena contó con la presencia de los secretarios de Educación y de Hacienda, Alonso Lujambio y Ernesto Cordero, respectivamente. Alejandro Encinas contó con Marcelo Ebrard en un acto de campaña. Por su parte, Eruviel Ávila fue acompañado por Ivonne Ortega, gobernadora de Yucatán.

A principios de junio los partidos fortalecieron sus estructuras de apoyo. Incluso el PRI incorporó a la campaña de Eruviel Ávila a militantes de otros partidos políticos, como René Arce, lo cual generó controversia. (EUEM, 31-V-2011) Este hecho fue duramente criticado por Bravo Mena y Alejandro Encinas. La incorporación de ex perredistas al equipo de Eruviel reflejó que el PRI jugó a la nota mediática. Aunque Arce y Círigo no representaban casi nada, en términos electorales, dieron la apariencia de una enorme popularidad del candidato del PRI

Bravo Mena, último en las preferencias electorales, anunció durante junio que replantearía su estrategia de campaña. (REM, 27-V-2011) Simultáneamente, se conoció su reunión en Los Pinos, con el presidente Calderón y la incorporación en su campaña de los diputados locales del PAN en el estado de México. El candidato panista insistió en fiscalizar los recursos erogados por el PRI, que parecían rebasar el límite legal. (EST, 29-V-2011)

El relanzamiento de la campaña de Bravo Mena reflejaba la preocupación de la dirigencia nacional de su partido por una campaña que no crecía. La preocupación era por lo que representaba la elección mexiquense, como antesala de los comicios presidenciales de 2012.

En junio los candidatos recorrieron el estado para reunirse con empresarios, líderes vecinales y de organizaciones civiles. Trataron temas importantes como la inseguridad, el desempleo, la corrupción, la educación y la cobertura de salud. Eruviel Ávila realizó su campaña arropado por varias corporaciones afines al PRI. Se rodeó de gobernadores, legisladores y líderes de su partido.

En ese mes surgió el rumor de la posible declinación de Bravo Mena en favor de Encinas. Con ello inició una guerra declarativa entre ambos partidos y candidatos. Sobre todo porque Bravo tenía una intención de voto muy por debajo de Encinas. Otro tema en el discurso de los candidatos y sus representantes fue el resultado del monitoreo de propaganda, así como de la nula sanción al PRI, ante el supuesto rebase de gastos de campaña. En cuanto al debate, lo más relevante fue la reclamación de Bravo a Encinas por rechazar la alianza. (REM, 2-II-2011)

Las campañas electorales vivieron un ambiente de constante crispación, por la constante denuncia de inequidad en la competencia. Este no fue un hecho aislado. En los actos de campaña fue evidente el dispendio de recursos por parte del abanderado priista. A lo anterior se sumaron las demandas en este sentido, siempre desechadas por el órgano electoral. (REM, 16-VI-2011)

El 27 de junio terminaron las campañas electorales. Los temas que destacaron fueron: las acusaciones sobre el derroche de recursos económicos y el manejo del voto corporativo por parte del PRI, así como una multa impuesta por el IEEM a Eruviel Ávila. Luis Felipe Bravo cerró campaña en Naucalpan; Alejandro Encinas en Ocuilan y Eruviel Ávila en Toluca. El cierre se da en el contexto del TEPJF ordena al IEEM que sancione al candidato de “Unidos

por ti,, por realizar actos anticipados de campaña en los municipios de Lerma y Cuautitlán Izcalli. (MEM, 23-VI-2011) Cabe recordar que esta demanda ya se había discutido en el IEEM, pero el órgano electoral la rechazó por considerarla sin fundamento. Ante este resultado la representación de “Unidos Podemos Más,, llevó el caso al TEPJF. El resultado de todo este proceso fue una multa insignificante, que poco afectó a Eruviel Ávila. (REM y MEM, 23-VI-2011)

La sanción de 26 mil 932 pesos, impuesta por el órgano electoral, provocó el reclamo de los partidos opositores, por el bajo monto. (EUEM, 24-VI-2001) Este fue el colofón de una serie de demandas que los partidos opositores presentaron ante el IEEM y el TEEM, pero los resultados casi siempre fueron negativos. Fue una evidencia del control del gobierno sobre las instituciones formalmente autónomas. Con este panorama adverso la oposición llegó a la elección del 3 de julio: con un marco legal que no le favorecía, con un derroche de recursos favorable a Eruviel Ávila y con autoridades electorales proclives al gobierno del estado, que no contaban con la imparcialidad para erigirse en árbitros de la contienda electoral. (REM, 26-VI-2011)

Los cierres de campaña de los candidatos a la gubernatura del Estado de México se presentaron sin ninguna novedad. Después del 29 de junio los candidatos dejaron de salir en los medios de comunicación. A pesar de ello, en muchos espectaculares, puentes, casas, automóviles, autobuses y otros medios de transporte público y particular se hacía presente la propaganda de los candidatos, sobre todo de Eruviel Ávila.

En general, durante la campaña electoral los candidatos expresaron gran cantidad de comentarios negativos hacia sus contrincantes. Esto no favoreció las condiciones democráticas de la contienda. Era necesario que durante las campañas los candidatos expresaran más sus proyectos de gobierno. También que dijeran la forma de llevarlos a la práctica para beneficiar a la población. La espiral de declaraciones no benefició al proceso electoral, ni representó un aumento significativo en sus preferencias electorales de Encinas y Bravo.

Los debates.

Desde el inicio de la campaña, a mediados de abril de 2011, se manejó la posibilidad de un debate entre los candidatos a la gubernatura. El objetivo era confrontar ideas, plataformas

políticas y propuestas de cada fuerza política. El ejercicio se presentó como una alternativa para que la ciudadanía estuviera más informada a la hora de emitir su voto.

Los candidatos opositores manifestaron su interés de participar. El PAN y el PRD propusieron al PRI realizar al menos seis debates, uno a la semana, organizados por el árbitro electoral o por las universidades. El PRI descartó la participación de Ávila Villegas en todos, ya que esto afectaría su agenda. La representación priista ante el IEEM consideró viable realizar dos debates. El 30 de abril el consejo general del IEEM aprobó los lineamientos para su realización. Panistas y perredistas insistieron en que los candidatos tuvieran un debate temático semanal, a partir del 16 de mayo. No hubo respuesta priista.

Los debates se presentaron como una oportunidad para conocer la forma de pensar, el carácter y la capacidad de liderazgo de los candidatos, así como su visión sobre los problemas de la entidad. Formalmente este ejercicio facilitaría el intercambio de opiniones para encontrar alternativas de solución a los problemas públicos. Cada candidato buscó posicionarse como la mejor opción para la sociedad. Los temas a tratar fueron: seguridad, empleo y educación.

Los debates permitieron ventilar públicamente programas, plataformas y ofertas de los candidatos. También afloraron trayectorias políticas. En particular, el segundo debate oficial recogió el discurso rutinario de cada uno. No se permitió el intercambio de ideas. En este debate las críticas a las propuestas y personalidades de los candidatos volvieron a ser el gran tema. La fallida alianza entre el PRD y el PAN fue incluida en este reclamo.

Las acusaciones entre candidatos subieron de tono. En esta lluvia de acusaciones se involucró a muchos personajes, tanto del ámbito local como nacional. En el primero destaca el gobernador Peña, al que se acusó de influir en la elección mediante el uso del aparato administrativo estatal. (MEM, 6-V-2011) Pero los candidatos opositores no solo golpearon al rival más fuerte. También entre ellos hubo acusaciones, algunas ya sin importancia, como la residencia de Encinas.

Hubo cuatro debates, dos oficiales organizados por el IEEM y dos que se realizaron en los foros de Televisa. Al final, los debates pusieron en evidencia que las trayectorias personales y políticas de los candidatos eran cuestionables. El ejercicio mostró a un Encinas con dominio del escenario y bien informado respecto a sus oponentes, lo cual le permitió salir airoso del mismo, como claro ganador, según las encuestas, aunque esto no se reflejó en los

votos. Con los debates se generó una paradoja política. Según un periódico, el ganador de los debates fue Encinas, sin embargo, esta victoria nunca se tradujo en un incremento de preferencias hacia su candidatura. (REM, 9-VI-2011)

Con los debates quedó claro que para hacer prevalecer la exposición de ideas era necesario que las instituciones electorales motivaran la confrontación de plataformas y programas entre las distintas fuerzas políticas. Los partidos tenían que entrar en el debate de ideas. Dar paso a la defensa de ideologías, programas y plataformas concretas, pero eso no ocurrió.

El gasto de los candidatos.

Este tema fue la constante más importante durante la campaña. Desde un principio se apreció el gasto enorme de Eruviel Ávila. Esto se reflejó en su presencia en diversos espacios: espectaculares, bardas, estaciones del metro, líneas de autobuses, paraderos, taxis, microbuses, entre otros. Los cálculos más conservadores hicieron evidente el rebase de los topes de gastos de campaña. Incluso los priistas hablaron de cifras que rebasaban lo autorizado por el órgano electoral.

Como si las evidencias no fueran suficientes, el propio abanderado del PRI alimentó la polémica. Durante la campaña anunció que recompensaría con autos y puestos públicos a los militantes que promovieran más el voto para su partido. (EUEM, 28-V-2011) Obviamente que esa oferta solo la podía hacer quien disponía de muchos recursos. Por esta razón Encinas y Bravo siempre reclamaron al IEEM equidad en la contienda. Sospecharon siempre de la existencia de muchos recursos priistas. Surgieron muchas evidencias de que las campañas no eran equitativas ni competitivas. Encinas y Bravo demandaron que se vigilaran los gastos de PRI. Sobre todo por la forma en que Ávila prometió que recompensaría a los promotores del voto militantes en su partido. (REM, 27-V-2011)

En este asunto no se apreció que el IEEM tuviera una estrategia de supervisión de gastos de campaña y de su procedencia. Sobre todo porque era obvio que los actos proselitistas del PRI contaban con fuerte financiamiento, cuyo origen debió demostrar ante las instancias correspondientes. Incluso se dijo que Eruviel Ávila concentró el 76 % de la publicidad. (MEM, 21-VI-2011)

Las revisiones precautorias

Ante lo abrumador de la propaganda de Eruviel Ávila, el PAN y el PRD demandaron revisiones precautorias de sus gastos de campaña. Aunque el IEEM inició acciones en este

sentido, la respuesta no pareció contundente. En el acuerdo respectivo no se fijaron fechas concretas para presentar resultados. Tampoco se hicieron compromisos precisos para corregir el problema. Todo hizo dudar de la eficacia de tales acciones. Hasta el final del proceso quedaron pendientes de resolver las demandas de revisiones precautorias de gastos, que presentaron PAN y PRD ante el IEEM. Era previsible que el resultado fuera insatisfactorio y esto se convirtió en un motivo de impugnación de los comicios.

Sobre todo porque lo único que podía resultar efectivo para revertir los resultados electorales era la revisión precautoria de los gastos de Ávila. El código de la entidad sancionaba con el retiro de la constancia de ganador a quien rebasara el tope de gastos de campaña. Esto podía acreditarse en el caso del candidato del PRI, pero tenía que recurrirse a los tribunales, ya que la composición del IEEM hacía imposible que esta denuncia prosperara en su seno. Además, era previsible que mientras el árbitro electoral no hiciera un pronunciamiento claro sobre los recursos gastados por los candidatos, los reclamos irían en aumento.

Para lograr un proceso electoral transparente, en donde el uso de los recursos fuera apegado a la normatividad, era necesario que los órganos y tribunales electorales fiscalizaran estrictamente el uso de los recursos de los partidos a tiempo. Esto era posible únicamente con las revisiones precautorias. Pero en los hechos el órgano electoral renunció a esa posibilidad

El papel de la prensa local.

Salvo excepciones, la prensa local del Valle de Toluca, se caracteriza por su cercanía con el gobierno del estado. Es histórica la relación de complicidades entre los dueños de los medios impresos y la administración estatal en turno. Los beneficios son recíprocos: la prensa local obtiene recursos económicos; a cambio de ello, el gobierno en turno recibe el apoyo de reporteros y articulistas. Esta es una relación que data desde los tiempos en que la libertad de expresión era inexistente en México y los periódicos vivían una libertad regulada por el gobierno en turno. Aunque esta situación cambió en el país, especialmente en la capital de la República, el resto no evolucionó de la misma manera. Particularmente el estado de México, tan cercano geográficamente al DF, pero tan lejano políticamente, tuvo un desarrollo político diferenciado. La zona metropolitana de la ciudad de México evolucionó de forma similar, al disponer de periódicos nacionales para su consumo. El resto

del estado no vivió lo mismo. Los periódicos de la entidad nacieron y crecieron al amparo del poder público. Esta es la razón por la cual le han servido en forma casi natural.

Esta relación ha sido especialmente útil durante los procesos electorales locales. El partido en el poder ha contado con aliados útiles para reproducir las condiciones políticas existentes. Los medios impresos han sido eficientes reproductores de la ideología dominante en la entidad. Hacen crecer las figuras políticas que dicta el interés gubernamental. Atacan sin consideraciones a los opositores internos y externos del partido gobernante. Carentes de recursos económicos propios viven de dádivas y, en el mejor de los casos, de la publicidad gubernamental. Esta es una situación que el gobierno aprovecha muy bien. Le ha sacado muchas ventajas políticas. Una revisión somera de la prensa local arroja una cantidad importante de boletines gubernamentales, disfrazados de noticias, que los periódicos reproducen acríticamente en sus páginas.

Eso fue que lo que hicieron durante la pasada elección de gobernador. Apoyar a Eruviel Ávila Villegas en sus actos de campaña. Siempre sacaron notas positivas. Tomaron los mejores ángulos para las fotografías. Casi todas las columnas fueron apologistas de las virtudes de su figura y la del gobernador que tuvo el supuesto mérito de elegirlo. Destacaron las encuestas de opinión, que siempre lo pusieron a la cabeza de las preferencias electorales. Hicieron valer su influencia para presentarlo como un candidato ganador, incluso de los debates que la mayoría lo vio perder. Al final fueron siempre de la mano del candidato oficial.

La inequidad del proceso electoral.

Las acusaciones de inequidad a favor del PRI ocurrieron desde antes del inicio de las campañas. En pleno proceso electoral, el 14 de marzo, las dirigencias nacionales del PAN y PRD mostraron un video, en donde se observa a un funcionario del gobierno estatal operando a favor del PRI. En el video se identificó a José Bernardo García Cisneros (presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, ex consejero y ex secretario general del IEEM) en una reunión con priistas en Valle de Chalco. (MEM, 17-III-2011) Les hablaba de la forma en que serían repartidos los recursos, despensas y tarjetas de apoyo para dirigir el voto ciudadano en beneficio del PRI. Lo anterior fue una clara evidencia de la injerencia de la administración mexiquense, para incidir en la preferencia del electorado el 3 de julio. El objetivo era darle un amplio margen de ventaja al PRI.

Por esta razón, el 17 de marzo las dirigencias nacionales del PAN y PRD presentaron una denuncia ante la PGR, por la supuesta intromisión de funcionarios del gobierno de Peña Nieto en el proceso electoral. PAN y PRD manifestaron su desacuerdo con el empleo de estas prácticas, por el uso indebido de recursos públicos con fines electorales. (EUEM, 18-III-2011)

La noticia sobre el video escándalo se posicionó como un tema de debate en la entidad y en el país. El asunto no fue para menos. Involucró a la administración mexiquense, en especial a la figura del gobernador Peña Nieto. La información contenida en el video permitió apreciar la vieja práctica del clientelismo político, la cual no ha sido abandonada por el gobierno mexiquense. Este hecho evidenció el uso indebido de los recursos públicos por parte de la administración estatal, con fines electorales. Los apoyos específicos por parte del gobierno estatal tuvieron como objetivo asegurar, de una forma u otra, el triunfo del PRI el 3 de julio. Con estas acciones se buscó garantizar la continuidad en el poder de uno de los grupos políticos de mayor influencia de nuestro país.

Desde el inicio de su campaña, Encinas denunció la inequidad en el proceso electoral. El uso de dádivas y programas del gobierno mexiquense fue duramente criticado por el perredista. A pesar de ello los consejeros electorales del IEEM hablaban de las condiciones de equidad en la elección y de la fiscalización de las campañas. A su vez, el PAN acusó al gobierno de la entidad de movilizar a los profesores a favor del PRI. (MEM, 10-VI-2011; EST, 12-V-2011)

Las declaraciones de los actores políticos en esta etapa de la elección fueron parte fundamental de la contienda. Buscaron presionar al órgano electoral, para que mejorara la vigilancia del proceso. Diversos líderes partidistas criticaron el manejo clientelar del gobierno estatal sobre diferentes organizaciones, en particular del sindicato de maestros de la entidad. La intervención del gobierno estatal originó un clima de tensión.

Desde el inicio de sus campañas, Encinas y Bravo acusaron a ciertas dependencias estatales del manejo clientelar en favor de Ávila. En los eventos del PAN y el PRD se cuestionó fuertemente la falta de equidad en la contienda. Desde un principio fue posible observar que la contienda era inequitativa. La oposición denunció siempre el fuerte apoyo de la administración estatal hacia Eruviel. Esta condición contribuyó a la falta de competitividad de la elección. La intervención del gobierno estatal en la campaña de Ávila fue una

constante. Se hizo sobre todo a través de los programas de regionalización, del uso clientelar de los programas sociales y de la entrega de obras de infraestructura. (EUEM, 22-VI-2011)

En cuanto a la intervención del gobierno de Peña en la elección y de los apoyos que tuvo su candidato, para el órgano electoral fue difícil amortiguar el descrédito de no impedir tales prácticas. Algunos de los más evidentes fueron la movilización clientelar del sindicato de maestros y la focalización de los programas de asistencia social estatales.

Este hecho fue evidente desde antes de que iniciara la contienda. La publicidad del gobierno del estado fue abrumadora. Se mantuvo así durante casi todo el proceso electoral, hasta que tardíamente el TEPJF ordenó el retiro de ella, a unos días de la elección. (EUEM, 21-VI-2011) La presencia del gobernador en los medios, sobre todo electrónicos, fue omnipresente. Las prácticas que durante décadas fueron utilizadas para garantizar la permanencia del partido en el poder no fueron erradicadas de la competencia electoral.

La actuación del árbitro electoral.

Desde el arranque mismo del proceso electoral, el 2 de enero, el PAN, el PRD y el PT denunciaron la parcialidad de los consejeros. Particularmente cuestionaron el desempeño de Juan Carlos Villarreal Martínez, Policarpo Montes de Oca, Jesús Jardón Nava y José Martínez Vilchis, todos propuestos por el PRI o sus aliados. A todos, pero sobre todo al primero, se les acusó de trabajar abiertamente a favor del gobierno del estado. Todos eran hombres muy cercanos al poder: el último empleo de Villarreal había sido asesor de Luis Miranda Nava, secretario general de gobierno con Peña; Montes de Oca fue vocal de organización de la junta local del IFE en el estado, pero venía desde la época de Chuayffet; Jardón había sido Secretario General de la Comisión Electoral del Estado de México, instancia manejada directamente por el gobierno; y Martínez Vilchis había sido rector de la universidad local. El cuadro lo completaban dos consejeros propuestos por el PAN: Abel Aguilar, ex secretario de estudio y cuenta del ministro Mariano Azuela, y Arturo Bolio Cerdán, ex magistrado electoral local, pero con fuertes vínculos con el gobierno estatal. Por último, el consejero presidente, Jesús Castillo Sandoval, fue propuesta del PRD, un hombre que antes de llegar al IEEM fue magistrado electoral, propuesto por el PAN. En el proceso no fue un factor decisivo.

Algunos trascendidos generaron mucho debate sobre el tema. En febrero se descubrió un aumento del gasto de los consejeros electorales del IEEM. La noticia generó encono. Dichos gastos se sumaron a otros autorizados. Esta polémica agravó el conflicto vivido al interior del IEEM y con el Congreso. Ahí se discutía la parcialidad de algunos consejeros electorales.

El 21 de febrero se anunció que el IEEM incrementó los apoyos financieros a los consejeros, para realizar cursos, reuniones, conferencias y contratar asesorías externas, entre otros. Este gasto se incrementó cinco veces. Pasó de 752 mil pesos en 2010 a 4.8 millones de pesos en 2011, es decir creció 538 por ciento. (REM, 21-II-2011) La justificación de aumentar el gasto para dotar de técnicas y conocimientos a los consejeros para el proceso electoral careció de sustento, porque ya era un requisito legal para ser electos.

El 25 de febrero la legislatura local se polarizó. El PAN y el PRD manifestaron su inconformidad con la parcialidad de algunos consejeros electorales. Pese a esto, la mayoría formada por el PRI, NA, el PVEM y C rechazaron revisar la actuación y, en su caso, la remoción de los consejeros electorales. Incluso les dieron un voto de confianza. Este desenlace generó una confrontación entre las fracciones legislativas y al interior del IEEM. (EST, 25-II-2011)

Pero más que por sus antecedentes, de sobra conocidos, los mencionados consejeros fueron impugnados por su desempeño. Al iniciar el proceso el PT abandonó su lugar en el consejo general del IEEM. También clausuró simbólicamente sus oficinas. Todo para demandar la sustitución de los mencionados consejeros, especialmente de Juan Carlos Villarreal, el operador más visible y cercano al gobierno del estado. Nada de lo descrito resultó efectivo. PAN, PRD y PT trataron de iniciar el procedimiento de destitución señalado en el código electoral, pero el PRI y sus aliados lo impidieron. Aprovecharon el control político que ejercía el PRI en la legislatura local, para darle largas al asunto. Finalmente lo congelaron y el tema no se abordó más. Se llegó con la misma integración del consejo general hasta el fin del proceso. Al final del mismo, PAN, PRD y PT terminaron acusándolos de lo mismo: parciales a favor del PRI.

Durante todo el proceso electoral se puso en duda la capacidad del IEEM para resolver las acusaciones y denuncias realizadas por la oposición, sobre todo en materia de fiscalización.

El IEEM debía ser un elemento clave en la consolidación democrática de la entidad. Sin embargo, no logró demostrar su imparcialidad a la hora de tomar decisiones antes y después de la jornada electoral. Su actuación le restó credibilidad.

Durante la mayor parte del proceso electoral los consejeros del IEEM declararon que existían las condiciones necesarias para garantizar comicios en paz. El presidente del IEEM declaró constantemente que existían las condiciones para que las elecciones fueran pacíficas. Siempre señaló que se preveía cualquier tipo de anomalía, para que el proceso se desarrollara en un marco de equidad, justicia y sana competencia entre las fuerzas políticas. Sin embargo, la tónica de algunos partidos fue presentar una serie de quejas y denuncias sobre la situación electoral vivida en la entidad. Las violaciones al código electoral y la parcialidad de ciertos consejeros con algunos partidos fueron constantes.

Las garantías que dio el IEEM para alcanzar la paz necesaria en el proceso electoral fueron solo parte del discurso. En realidad hizo pocas cosas para garantizarlo. Poco hizo para detener las violaciones al código. El caso no resuelto del video escándalo de García Cisneros permitió ver cómo el uso indebido de los recursos públicos, para fines electorales, fue minimizado por las autoridades competentes.

Con este tipo de acontecimientos era difícil que se tuviera un ambiente de paz en el proceso electoral. Tampoco era posible que la competencia se desarrollara de manera justa y apegada a la norma. En su momento, la salida del PT del Consejo General del IEEM fue una muestra de los problemas al interior del instituto; de la falta de diálogo y acuerdos del árbitro electoral con los partidos políticos.

La observación de su actuación reveló que a más de quince años de fundado el IEEM todavía contaba con prácticas heredadas de la Comisión Estatal Electoral, que limitaron el desempeño de sus autoridades. Su descuido en aspectos sensibles del proceso electoral lo complicó todo. En los hechos renunció al compromiso de velar por una contienda justa y limpia. Sobre todo era importante que la regulación establecida por el órgano electoral, en materia de gastos de campaña se respetara, para evitar conflictos mayores después del proceso electoral. A pesar de ello, el IEEM no atendió la petición de fiscalizar los gastos de campaña del PRI. No evitó que los gastos del partido gobernante se excedieran. Tampoco procuró que el tope establecido en la ley electoral fuera respetado. No combatió frontalmente los vicios y desviaciones electorales; no promovió eficazmente el voto entre

los ciudadanos. Todo esto trajo como resultado una pérdida de credibilidad en los procesos políticos y el deterioro del sistema electoral.

Ante la desconfianza de los partidos opositores al PRI y la sospecha de parcialidad de los consejeros electorales, la mayoría de los acuerdos del consejo general fueron impugnados ante los tribunales. Esto fue así porque la actitud prevaleciente en el consejo general fue de parcialidad a favor del PRI. Las demandas de los partidos opositores al gobierno fueron generalmente desoídas, o tardíamente atendidas. Desde un principio se impugnaron acuerdos fundamentales para el proceso electoral, como la integración de las juntas distritales y los consejos distritales, que fueron parcialmente revertidos en tribunales. Pero el ejemplo más claro de ello fue la solicitud para detener los actos anticipados de campaña de Eruviel Ávila o la demanda de realizar revisiones precautorias de los gastos del mismo. En el primer caso el TEPJF le dio la razón al PRD, en el segundo el TEEM le ordenó al IEEM hacer públicos los informes respectivos.

La impugnación del los acuerdos ante los tribunales electorales

Una historia similar a la del consejo general del IEEM fue la vivida en el pleno del TEEM. Con una mayoría de tres consejeros de cinco que lo integran, el PRI controló todas las decisiones: con Jorge E. Muciño Escalona en la presidencia, un hombre cercano al ex gobernador César Camacho; Raúl Flores Bernal, asesor del primero cuando Muciño era consejero en el IEEM y Luz María Zarza, ex asesora de Emmanuel Villicaña como secretario general del IEEM, el gobierno aseguró la mayoría en las decisiones importantes. Con un cuadro como éste la maquinaria electoral estaba segura de la inviabilidad de las quejas opositoras. Por esta razón, los partidos opositores al PRI tomaron como trámite obligado el paso de sus impugnaciones por este tribunal y cuando pudieron lo evitaron. Acudieron directamente al TEPJF. No confiaban en el TEEM, al que acusaron de parcial.

Una de las resoluciones más controvertidas en el marco del proceso electoral fue la sanción impuesta por el IFE a Peña, por la difusión de su informe de gobierno a nivel nacional. Hubo intensos cabildeos del PRI y del gobierno del estado con la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, que al parecer ocurrieron hasta en el comedor de su casa. Por eso el PAN pidió que ella se excusara de resolver; Alanís se negó. Al final el pleno del TEPJF revocó el acuerdo del IFE, que sancionaba a Peña, y solo sancionó a las televisoras que difundieron los spots. Todo esto en el marco del proceso para elegir gobernador del estado.

El otro ejemplo controvertido fue la sanción impuesta a Eruviel por realizar actos anticipados de campaña. La falta se calificó como no grave y solo se le ordenó al IEEM sancionarlo económicamente. Éste último le impuso una multa de poco más de 26 mil pesos, cifra insignificante si se le compara con la cantidad de recursos gastados por el priista en su campaña. Al final se impuso un castigo mucho menor del que se esperaba. Sobre todo si se tiene en cuenta que el código electoral local señalaba que el infractor podría ser sancionado hasta con la pérdida del registro.

Otra resolución importante del TEPJF fue sobre la propaganda del gobierno del estado, colocada en todo el territorio mexiquense. Inicialmente se ordenó retirarla solo del distrito electoral de Texcoco. Hasta muy tardíamente se ordenó su retiro en todo el territorio del estado, cuando el efecto político era irreversible. La figura de Peña estaba muy posicionada entre el electorado. Más tarde las encuestas demostraron que los no priistas votaron por Eruviel influenciados por la imagen del gobernador Peña.

Por último, el 3 de agosto de 2011, el TEPJF dio 24 horas al secretario ejecutivo del IEEM para formular un proyecto de resolución sobre el presunto rebase de tope de gastos de precampaña de Eruviel Ávila, gobernador electo del estado. Lo anterior, en respuesta a una impugnación presentada por la coalición Unidos Podemos Más, que postuló a Alejandro Encinas como candidato a la gubernatura del estado. Dicha coalición impugnó la decisión Javier López, secretario Ejecutivo de dicho Instituto, quien desechó la queja por presunto rebase de tope de gastos de precampaña presentada por esa coalición.

De acuerdo con el proyecto de sentencia, elaborado por el magistrado Salvador Nava Gomar, el secretario ejecutivo del IEEM sólo tenía facultades para emitir un proyecto de resolución sobre la queja presentada, pero no podía desecharla.

El abstencionismo electoral

Desde un principio del proceso electoral se dijo que los esfuerzos del IEEM se dirigirían a aumentar los niveles de votación, especialmente entre los jóvenes, considerados los más abstencionistas. (MEM, 25-II-2011) El voto femenino también fue considerado: pieza clave en la elección del estado de México. El tema de la participación femenina en los comicios se hizo relevante. Esto se debió a que las mujeres representaron casi el 52 por ciento del padrón electoral en la entidad y fueron un factor clave para elegir al gobernador del estado.

Cuando el 8 de marzo se celebró el día internacional de la mujer se enfatizó en la participación de la mujer en la vida social, en especial en la vida política del país y de los estados. Diversos especialistas coincidieron en que el voto femenino podía ser el factor determinante para decidir quién sería el próximo gobernador del estado. De acuerdo a las cifras del último censo de población el número de habitantes ascendía a 15 millones 31 mil 728 personas, de las cuales 7 millones 503 mil 694 son hombres y 7 millones 528 mil 34 mujeres. En los comicios del 3 de julio el voto de las mujeres fue trascendente. Las mujeres representaron 51.9 por ciento de la lista nominal y 51.8 por ciento del padrón electoral. El peso de las mujeres fue significativo, pues eran más de la mitad de los votos potenciales. Algunos de los municipios con más concentración de votos femeninos fueron Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Los Reyes la Paz y Netzahualcóyotl.

Hacia este objetivo se enfocaron los partidos y candidatos. Sobre todo porque en los últimos procesos electorales las mujeres votaron poco. En el padrón electoral las mujeres representaron casi el 52%. La cifra decía todo de la importancia del voto femenino en las elecciones. Buena parte de la propaganda y mensajes de los candidatos se dirigió hacia ellas. Para diseñar lo anterior se partió de que, en general, el voto obedece más a cuestiones afectivas; la simpatía e imagen de los candidatos es importante a la hora de emitir el sufragio; las cuestiones evaluativas de plataformas, ideologías y trayectoria del candidato son secundarios.

El IEEM contó como nunca antes con la difusión masiva de spots para promover el voto, sin embargo, los resultados fueron negativos. Con los niveles de abstención quedó claro que una de las demandas que se debía atender era la inconformidad ciudadana, con el sistema de partidos y electoral imperante en la entidad. La abstención reflejó que los ciudadanos no estaban de acuerdo en las formas de hacer política en la entidad. Fue una advertencia de que, si seguían por la ruta trazada, los partidos tendrían mayores márgenes de triunfo, pero sin apoyo de grandes sectores del electorado. Es decir que serán elegidos por una minoría que responderá a sus intereses, pero que no favorecerá a las mayorías. Con ello se estará abonando a una escisión mayor entre partidos políticos y sociedad.

El voto no se convirtió en un elemento decisivo y verdaderamente significativo. Los partidos concibieron a las elecciones como meras pasarelas de figuras, imágenes y candidatos populares con importante presencia en los medios de comunicación. No se puso

énfasis en los programas, plataformas, principios, ideologías y valores. La confrontación de ellos fue marginal a la hora de convencer al electorado.

La abstención dejó claro que los partidos tienen importante responsabilidad en que la ciudadanía vea a la política más como forma y no como fondo. Estos deben cambiar su forma de hacer política, contribuyendo a la construcción de un sistema político, en donde la ciudadanía esté más comprometida e involucrada en la vida política y en las decisiones que se toman en torno a ella.

Los resultados electorales

Las cifras del 3 de julio suscitaron distintas reacciones entre los diversos partidos y actores políticos. Los números favorecieron a Eruviel Ávila, pero se registró un alto porcentaje de abstencionismo. Las inconformidades de la oposición se expresaron a través de Encinas y Bravo Mena. A través de sus representantes en el IEEM impugnaron los resultados, por el rebase de los topes de gastos de campaña y por la intervención del gobierno local en los comicios. Los resultados de la elección favorecieron, tanto de forma preliminar como en el conteo final de cada uno de los distritos, a Eruviel Ávila con alrededor del 62 por ciento; el segundo lugar fue para Encinas, con 21 por ciento; y el tercer lugar para Bravo, con un lejano 12 por ciento. El cómputo final arrojó una cifra de casi 57 por ciento de abstención. (MEM, 4-VII-2011)

El PAN y el PRD impugnaron legalmente la elección. Pero para ello requerían de las evidencias necesarias y no dispusieron de todas, porque algunas estaban en proceso, como el monitoreo de medios y las revisiones precautorias de los gastos de campaña. Eventualmente solo pudieron disponer de testimonios de compra de votos y otras prácticas del PRI antes y después de los comicios. (EST, 9-VII-2011)

El triunfo de Eruviel Ávila con márgenes superiores a lo esperado tuvo diversas explicaciones. Una de ellas fue que reflejó la cantidad de recursos gastados por su partido para ganar la elección, permitidos o no por la ley. De alguna manera los resultados y los medios de que dispuso el PRI para esta elección hicieron verlo como el ganador indiscutible. Sin embargo, la cifra más contundente de esta elección fue la abstención. Esta reflejó el rechazo de la ciudadanía a las formas de operar de los partidos y del gobierno. Fue un claro aviso de que las campañas no convencieron a los ciudadanos; que no hubo incentivos para participar.

Por otra parte, la reacción y argumentos de defensa de los partidos derrotados eran previsibles. El dispendio de los gastos del PRI provocó una competencia inequitativa. Ante lo adverso de los resultados, la oposición concentró sus esfuerzos en la anulación de la elección. Este era el único recurso posible para revertir el resultado. Al final, no se consiguió tal propósito.

Lecciones del proceso electoral 2011

La elección de gobernador en el estado de México dejó claro que es necesaria una transformación de fondo, para que las elecciones mexiquenses se conviertan realmente en lo que debe ser: un proceso a través del cual los ciudadanos decidan libremente quién los gobierna y con qué proyecto político.

La primera gran lección de la elección es que los comicios no pueden ser competitivos mientras exista una legislación electoral que lo impida. Es necesario modificar las fechas para la fiscalización de los gastos de campaña. Tal como está señalado en el código es imposible sancionar los rebases. Menos aún impedir la asunción del cargo. Esto propició que Eruviel Ávila gastara excesivamente en publicidad, a sabiendas de que no sería castigado, porque los tiempos legales lo impiden. Un ejercicio similar hay que hacer con las revisiones precautorias. Su realización no debe estar condicionada a la decisión de los consejeros electorales. Tienen que establecerse fechas precisas para su publicación y sus resultados hacerse públicos. Se trata de recursos públicos a los que no se les puede dar tratamiento de fortunas personales.

Lo mismo se puede afirmar respecto a los órganos electorales. Mientras los partidos sigan apostando por las cuotas de consejeros, el esquema se repetirá hasta el infinito. Los consejeros propuestos por el partido que gobierna siempre serán mayoría en la composición y en las votaciones. Así lo han propiciado incluso los partidos de oposición, quienes también exigen lealtad a los consejeros que proponen. Lo peor es que algunos creen que sí se la deben. Este mismo esquema se reproduce, con algunas variantes a nivel de la junta general, las juntas distritales y las juntas municipales del IEEM. Pero el reparto llega incluso al nivel de instructores, capacitadores, coordinadores de logística, auxiliares, secretarías y prácticamente todo el personal que se contrata. Al final el PRI lleva mayoría en todo y termina por imponerse en casi todas las decisiones importantes.

Si se quiere contar con un órgano profesional y confiable, los partidos tienen que renunciar al sistema de cuotas y hacer un rediseño institucional del instituto, por ello es recomendable implantar el servicio profesional electoral de carrera, de tal suerte que el funcionario electoral deba su lealtad a la institución y no al partido que ahí lo colocó. El IEEM requiere de un trabajo de reingeniería constitucional, política y administrativa que lo dote de la confianza de los electores. Lo mismo vale decir para el caso del TEEM. La apuesta por la composición partidaria de los órganos electorales revela que el único beneficiario es quien tiene la mayoría y no las razones jurídicas. En síntesis, el sistema electoral requiere una reforma de fondo si quiere ser confiable.

También se requiere modificar la concepción que se tiene sobre la competencia electoral. Los partidos y las elecciones no pueden seguir costando tanto. No se puede seguir pretextando que la razón es que se cuenta con el padrón electoral más grande del país. Las elecciones no pueden seguir siendo onerosas y una carga para los contribuyentes. Sus costos tienen que disminuir y los excedentes deben dedicarse a la salud o la educación. No se puede tener a funcionarios electorales súper pagados, para hacerlos cómplices, mientras los médicos y maestros cuentan con salarios bajos. De nada sirve al estado ser un ejemplo en infraestructura electoral, si posee el déficit más alto en cobertura de educación superior. Hay que repensar la competencia electoral para hacerla más participativa, menos onerosa y más útil socialmente.

Fuentes consultadas

Milenio Estado de México, Toluca, 15-XII-2010 / 9-VIII-2011.

El Universal Estado de México, Toluca, 15-XII-2010 / 9-VIII-2011..

Reforma Estado de México, Toluca, 15-XII-2010 / 9-VIII-2011.

El Sol de Toluca, Toluca, 15-XII-2010 / 9-VIII-2011.

Glosario de siglas

IFE	Instituto Federal Electoral
IEEM	Instituto Electoral del Estado de México
TEPJF	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
TEEM	Tribunal Electoral del Estado de México
PAN	Partido Acción Nacional

PRI	Partido Revolucionario Institucional
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PVEM	Partido Verde Ecologista de México
PT	Partido del Trabajo
C	Convergencia
NA	Nueva Alianza
CEN	Comité Ejecutivo Nacional
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
PGR	Procuraduría General de la República
EUEM	El Universal Estado de México
REM	Reforma Estado de México
MEM	Milenio Estado de México
EST	El Sol de Toluca